

JUICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS
POLÍTICO ELECTORALES DEL CIUDADANO

EXPEDIENTE:	TEEG-JPDC-86/2018
PARTE ACTORA:	ARTURO BRAVO GUADARRAMA
RESPONSABLE:	COMISIÓN NACIONAL JURISDICCIONAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA
TERCERO INTERESADO:	DANIEL ALEJANDRO MARES SÁNCHEZ
MAGISTRADA PONENTE:	MARÍA DOLORES LÓPEZ LOZA
PROYECTISTAS:	FRANCISCO DE JESÚS REYNOSO VALENZUELA Y JUAN ANTONIO MACÍAS PÉREZ.

Guanajuato, Guanajuato, a **quince de junio del año dos mil dieciocho.**

Sentencia definitiva que **confirma** la resolución **QO/GTO/73/2018** emitida por la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática, el pasado diecisiete de abril del año dos mil dieciocho, por las siguientes razones: **a)** La sentencia impugnada no es incongruente; **b)** La resolución controvertida no ordenó destituir a Arturo Bravo Guadarrama para el cargo de Secretario de Finanzas y Administración del Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática; y **c)** La responsable no estaba obligada a ordenar el inicio del procedimiento de destitución del actor, por lo que no se vulneró su garantía de audiencia.

GLOSARIO

Comité Estatal:	Comité Ejecutivo Estatal del Partido de la Revolución Democrática
Comisión Jurisdiccional:	Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática
Juicio ciudadano:	Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano
Ley electoral local:	Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Guanajuato
PRD:	Partido de la Revolución Democrática

1. ANTECEDENTES. De las afirmaciones de la parte actora, así como de las constancias que obran en autos y hechos notorios que puede invocar este Tribunal¹ se advierte lo siguiente:

1.1. Primer juicio ciudadano. El dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, Daniel Alejandro Mares Sánchez promovió un *juicio ciudadano* ante este Tribunal, en contra de la omisión del *Comité Estatal*, de iniciar y llevar a cabo el procedimiento de remoción que establece el artículo 111 de los Estatutos del *PRD*, en contra de **Arturo Bravo Guadarrama**, por ocupar ilícitamente el cargo de Secretario de Finanzas y Administración del citado comité, mismo que se radicó bajo el número de expediente **TEEG-JPDC-013/2018** y fue resuelto el veinte de febrero del año en curso, en el sentido de declarar improcedente el juicio al no haber agotado la instancia intrapartidista, por lo que se ordenó reencauzar la demanda a la *Comisión Jurisdiccional*.²

1.2. Segundo juicio ciudadano. En contra de la omisión de la *Comisión Jurisdiccional* de resolver el recurso de queja contra órgano, Daniel Alejandro Mares Sánchez promovió una segunda demanda de *juicio ciudadano*, mismo que fue radicado bajo el número de expediente **TEEG-JPDC-019/2018** y resuelto el pasado veintitrés de abril de dos mil dieciocho, en el sentido de declarar fundada la omisión impugnada, ordenando a la *Comisión Jurisdiccional* dictar la resolución correspondiente.³

1.3. Acto impugnado. En cumplimiento a la sentencia citada en el punto anterior, el diecisiete de abril del año en curso, la *Comisión Jurisdiccional* resolvió la queja identificada con el número el expediente **QO/GTO/073/2018**, en el sentido de declarar la actualización de la prohibición establecida en el artículo 111 de los Estatutos del *PRD*, por parte del ciudadano **Arturo Bravo Guadarrama** consistente en que ocupaba un cargo de dirección estatal en el

¹ En términos de lo dispuesto por el artículo 417 de la *Ley electoral local*.

² Consultable en la página electrónica: <http://transparencia.teegto.org.mx/resolucion2018/juicios/TEEG-JPDC-13-2018.pdf>

³ Consultable en la página electrónica: <http://transparencia.teegto.org.mx/resolucion2018/juicios/TEEG-JPDC-19-2018.pdf>

PRD y un cargo de elección popular al mismo tiempo, por lo que ordenó al ahora actor manifestar cuál de los dos cargos deseaba continuar ejerciendo.

1.4. Tercer *juicio ciudadano*. Inconforme con tal determinación, el siete de mayo del año dos mil dieciocho, Arturo Bravo Guadarrama presentó ante este Tribunal su demanda de *juicio ciudadano*.

1.5. Turno. Mediante acuerdo de nueve de mayo de dos mil dieciocho, el Magistrado Presidente **Héctor René García Ruiz**, acordó turnar el expediente a la Primera Ponencia a cargo de la **Magistrada María Dolores López Loza**.

1.6. Radicación y requerimiento. El catorce de mayo de dos mil dieciocho, la Magistrada Instructora y Ponente emitió el acuerdo de radicación de la demanda, así como ordenó diversos requerimientos a la *Comisión Jurisdiccional* a fin de contar con la debida integración del expediente.

1.7. Recepción de documentos y admisión. El veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, la Magistrada Instructora y Ponente emitió el acuerdo de recepción de documentos por el que se tuvo a la *Comisión Jurisdiccional* dando cumplimiento al requerimiento formulado mediante auto de catorce de mayo del año en curso; asimismo, se ordenó admitir la demanda y correr traslado con copia de la misma a la autoridad responsable y a cualquier persona en carácter de tercera interesada para que dentro del plazo de cuarenta y ocho horas realizaran alegaciones u ofrecieran pruebas.

1.8. Recepción de documentos y reconocimiento de tercero interesado. El veintidós de mayo del año en curso, la Magistrada Instructora y Ponente emitió el acuerdo por el que se reconoció al ciudadano Daniel Alejandro Mares Sánchez con el carácter de tercero interesado, en virtud de que señaló haber sido parte actora dentro del expediente intrapartidista que dio motivo al presente medio de impugnación; en ese sentido, se ordenó correrle traslado con copia de la demanda, para que dentro del plazo de cuarenta y ocho horas realizara alegaciones u ofreciera pruebas.

1.9. Recepción de documentos y cierre de instrucción. El veintiocho de mayo del año en curso, la Magistrada Instructora y Ponente emitió el acuerdo por el que se certificó que había vencido el plazo de cuarenta y ocho horas otorgado a

la *Comisión Jurisdiccional*, así como a Daniel Alejandro Mares Sánchez para que realizaran manifestaciones y ofrecieran pruebas, plazo dentro del cual se presentaron los escritos respectivos; así como, se declaró cerrada la etapa de instrucción al no haber diligencias o pruebas pendientes de desahogo, quedando los autos en estado de dictar resolución, misma que ahora se pronuncia.

2. CONSIDERACIONES DE LA RESOLUCIÓN.

2.1. Competencia. Este Tribunal es competente para conocer y resolver el presente juicio, en virtud de que el acto reclamado guarda relación con un conflicto partidista relativo a la integración de los órganos de dirección de un partido político en el estado de Guanajuato, en el que éste Tribunal ejerce su jurisdicción.

Lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 150, 163 fracción I, 166 fracciones II y III, 381, fracción I y 388 al 391, de la *Ley electoral local*; así como los artículos 6, 10, fracción I, 11, 13, 14, 90 y 91, del Reglamento Interior del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato.

2.2. Causales de improcedencia. Por ser de orden público y de estudio preferente se analizará la causal de improcedencia que hace valer la *Comisión Jurisdiccional*, consistente en que Arturo Bravo Guadarrama, ha consentido la resolución emitida el pasado veintisiete de abril del año en curso, al haber dado cumplimiento a lo ordenado en dicha sentencia.

Al respecto, la *Comisión Jurisdiccional* manifiesta que en el caso concreto, se actualiza la causal de improcedencia establecida en la fracción II, del artículo 420 de la *Ley electoral local* consistente en que será desechado el medio de impugnación cuando se haya consentido el acto controvertido.

Lo anterior, porque el pasado quince de mayo del año en curso, Arturo Bravo Guadarrama presentó ante la citada comisión un escrito en el que manifiesta haber pedido licencia al cargo de diputado federal, a fin de dar cumplimiento a lo ordenado mediante resolución dictada el pasado veintisiete de abril del año en curso y que constituye el acto reclamado en el presente juicio, de ahí que desde la perspectiva de la autoridad responsable, se actualice la causal de improcedencia citada.

Sin embargo, este Tribunal considera que no le asiste la razón a la *Comisión Jurisdiccional*, ya que el actor impugnó dicha resolución y el escrito que presentó a la *Comisión Jurisdiccional* el pasado quince de mayo, en ningún momento se puede considerar como un acto de consentimiento, pues se presentó con la finalidad de no incurrir en un desacato a una orden del órgano jurisdiccional, lo cual es acorde con lo establecido por el párrafo quince, del artículo 31 de la Constitución Política para el Estado de Guanajuato, que establece que en materia electoral la interposición de los medios de impugnación no producirá, en ningún caso, efectos suspensivos del acto o resolución impugnados.

Finalmente, cabe precisar que la pretensión del accionante es que se revoque la resolución emitida por la *Comisión Jurisdiccional*, ya que desde su perspectiva, dicho acto resolvió **su destitución** como Secretario de Finanzas y Administración del *Comité Estatal*, sin que se haya seguido el procedimiento establecido para tal efecto, lo que en todo caso será materia del fondo del asunto y sobre ello no existe evidencia de consentimiento expreso o tácito, de ahí que no se actualice la causal de improcedencia hecha valer por la autoridad responsable.

2.3. Procedencia del medio de impugnación. Por ser de orden público, este Tribunal se enfoca en el análisis oficioso de los requisitos de procedencia del medio de impugnación,⁴ de cuyo resultado se advierte que la demanda es procedente en atención al cumplimiento de los requisitos siguientes:

2.3.1. Oportunidad. Debe estimarse que el presente *juicio ciudadano* es oportuno, dado que la parte actora se inconforma con la resolución **QO/GTO/73/2018** de fecha diecisiete de abril del año en curso, emitida por la *Comisión Jurisdiccional* y que le fue notificada al actor de manera personal el veintisiete de abril del mismo año, por tanto, si la demanda fue presentada a este Tribunal el siete de mayo del año en curso,⁵ al realizar el cómputo de días transcurridos, hasta la presentación del medio de impugnación, se tiene que ésta se realizó cumpliendo con la oportunidad exigida, pues se hizo dentro del plazo de **cinco días hábiles siguientes** a que le fue notificada la resolución que combate.

⁴ De conformidad con lo establecido en el artículos 382, 388 al 391 de la *Ley electoral local*.

⁵ Según consta en el sello de recepción plasmado en la foja 01 de autos.

Lo anterior, porque la materia de impugnación no está relacionada con el proceso electoral que está en curso, por lo que el plazo para la presentación de la demanda se computa en días hábiles.⁶

2.3.2. Forma. La demanda reúne de manera esencial los requisitos formales que establece el artículo 382 de la *Ley electoral local*, en razón de que se formuló por escrito y contiene el nombre, domicilio y firma autógrafa de quien promueve; se identifica el acto impugnado y la autoridad responsable, se mencionan los antecedentes y hechos motivo de la impugnación, los preceptos legales que se consideran violados, así como los agravios que, a decir de la parte actora, le causa la resolución combatida.

2.3.3. Legitimación e interés jurídico. Conforme a lo dispuesto en los artículos 9, 35, 41, base VI, de la Constitución Federal; y 388 de la *Ley electoral local*, el juicio que nos ocupa fue promovido por parte legítima, al tratarse de un ciudadano que lo interpone por sí, a nombre propio, en su carácter de Secretario de Finanzas y Administración del *Comité Estatal*.

Por tanto, es evidente que el actor cuenta con interés jurídico para promover el presente juicio, al controvertir una resolución dictada por la *Comisión Jurisdiccional* en la que éste fue parte y que en su concepto le ocasiona vulneración a sus derechos político-electorales.

2.3.4. Definitividad. Este requisito se surte en la especie, dado que, conforme a la legislación aplicable, no procede ningún medio o recurso previo a través del cual pudiera ser combatida la resolución que ahora se cuestiona, de manera que debe entenderse para los efectos de procedencia, como una determinación definitiva.

Por tanto, en razón de que fue desestimada la causal de improcedencia hecha valer por la *Comisión Jurisdiccional*, además de que se encuentran satisfechos los requisitos para la procedencia del presente juicio, este Tribunal no advierte

⁶ Al respecto se cita la jurisprudencia **1/2009-SR11** ratificada por la *Sala Superior*, de rubro: “**PLAZO PARA IMPUGNAR ACTOS EMITIDOS DURANTE EL DESARROLLO DE UN PROCESO ELECTORAL, QUE NO ESTÉN VINCULADOS A ÉSTE. NO DEBEN COMPUTARSE TODOS LOS DÍAS Y HORAS COMO HÁBILES**”. Se hace la precisión de que las tesis, jurisprudencias o criterios jurisdiccionales que se citen en la presente determinación, pueden ser consultados íntegramente en las páginas electrónicas www.te.gob.mx y www.scjn.gob.mx

la actualización de alguna causal de improcedencia o sobreseimiento de las contempladas en los artículos 420 y 421 de la *Ley electoral local*, por lo que se procede a realizar el estudio de fondo de la controversia planteada, a la luz de los agravios que se formulan.

3. Estudio de fondo.

En primer término, cabe destacar que en el presente fallo se aplicará la suplencia de la queja,⁷ cuando se adviertan deficiencias en la expresión de agravios, pero existan afirmaciones sobre hechos de los cuales se puedan deducir.

En el mismo sentido, la *Sala Superior*, ha sostenido que los agravios que se hagan valer en un medio de impugnación, pueden ser desprendidos de cualquier parte del escrito inicial, por lo que no necesariamente deben contenerse en el capítulo respectivo.

Ello, siempre que se expresen con claridad las violaciones constitucionales o legales que se consideren fueron cometidas por la responsable, exponiendo los razonamientos suficientes que permitan advertir su causa de pedir.⁸

3.1. Planteamiento del caso.

El presente asunto tiene su origen en la demanda presentada por Daniel Alejandro Mares Sánchez, en contra del *Comité Estatal* y de **Arturo Bravo Guadarrama**; por la omisión de dicho órgano de iniciar y llevar a cabo el procedimiento de remoción del citado funcionario partidista, ya que ocupa un cargo de dirección estatal en el *PRD* y un cargo de elección popular al mismo tiempo, lo que actualiza una vulneración a lo establecido en los Estatutos del *PRD*.

Demanda que inicialmente fue presentada ante este Tribunal y reencauzada en fecha veinte de febrero de dos mil dieciocho a la *Comisión Jurisdiccional* para que conociera y resolviera lo conducente vía queja contra órgano.

⁷ En términos del último párrafo del artículo 388 de la *Ley electoral local*.

⁸ Sirven de sustento las jurisprudencias número 02/98 y 3/2000 emitidas por la *Sala Superior* de rubro: “AGRAVIOS. PUEDEN ENCONTRARSE EN CUALQUIER PARTE DEL ESCRITO INICIAL.” y “AGRAVIOS. PARA TENERLOS POR DEBIDAMENTE CONFIGURADOS ES SUFICIENTE CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR.” Respectivamente.

De igual forma, ante la omisión de la *Comisión Jurisdiccional* de dar cumplimiento a la resolución citada en el párrafo anterior, Daniel Alejandro Mares Sánchez, promovió una segunda demanda de *juicio ciudadano* ante este Tribunal, misma que fue resuelta en el sentido de declarar fundado el agravio consistente en la omisión de resolver, por lo que ordenó a la *Comisión Jurisdiccional* emitir la sentencia correspondiente.

En consecuencia, el diecisiete de abril de dos mil dieciocho, la *Comisión Jurisdiccional* emitió la resolución **QO/GTO/73/2018**, en la que se determinó la actualización de la prohibición establecida en el artículo 111 de los Estatutos del *PRD*, por parte del ciudadano **Arturo Bravo Guadarrama**, ya que ocupa un cargo de dirección estatal en el *PRD* y un cargo de elección popular al mismo tiempo y en consecuencia, la responsable ordenó al ahora actor manifestara cuál de los dos cargos deseaba continuar ejerciendo.

Inconforme con lo anterior, el actor promovió demanda de *juicio ciudadano* ante este Tribunal en la que hace valer los siguientes conceptos de impugnación:

La *Comisión Jurisdiccional* de manera indebida en su considerando CUARTO **modifica la causa de pedir del actor**, pues el medio de impugnación estaba dirigido a una queja contra órgano y al momento de resolver establece como acto a dilucidar si se configuró una violación en sus actuaciones por fungir como Secretario de Finanzas y Administración del *Comité Estatal* y como diputado federal, con lo que se violenta el principio de congruencia.

Además, considera que dicha determinación fue indebida, ya que la *Comisión Jurisdiccional* **estableció como sanción su destitución** al cargo de Secretario de Finanzas y Administración del *Comité Estatal*, sin fundamento legal alguno, pues no siguió el procedimiento establecido en el Estatuto y Reglamento de Disciplina Interna, ambos del *PRD*, para tal efecto.

Lo anterior, porque considera que en caso de que la *Comisión Jurisdiccional* estimara fundada la queja contra órgano, **ésta debió ordenar a los integrantes de la Mesa Directiva del Consejo Estatal del PRD en Guanajuato, para que se iniciara el procedimiento previsto en los artículos 26, inciso c) y d), 27 al**

31, 35, 51 y 59 del Reglamento de los Consejos del PRD, para la remoción o destitución del cargo de un integrante del *Comité Estatal*, lo cual no sucedió.

En razón de lo anterior, considera que se violó su derecho de audiencia y defensa, toda vez que **se le sanciona**, sin habersele otorgado la oportunidad de presentar sus defensas **en contra de la destitución ordenada**.

3.2 Problemas jurídicos a resolver.

Con base en los planteamientos expuestos por la parte actora, se tiene que los problemas jurídicos a resolver en este asunto son los siguientes:

- a) Determinar si la *Comisión Jurisdiccional* de manera indebida **modificó la causa de pedir** de Daniel Alejandro Mares Sánchez, al momento de resolver la resolución impugnada, con lo que se hubiese violentado el principio de congruencia.
- b) Determinar si la *Comisión jurisdiccional* al momento de resolver **ordenó la destitución del actor** como Secretario de Finanzas y Administración del *Comité Estatal*.
- c) Determinar si la responsable debía **ordenar a los integrantes de la Mesa Directiva del Consejo Estatal del PRD en Guanajuato**, el inicio del procedimiento de destitución del accionante conforme a la normativa aplicable, y si al no hacerlo, vulneró su garantía de audiencia.

En este sentido, por cuestión de método, se hará el análisis de los agravios de la parte actora en apartados independientes, sin que con ello se le cause algún perjuicio, pues lo relevante es que todos sus planteamientos sean analizados.⁹

3.3. La resolución emitida por la *Comisión Jurisdiccional* no modificó la causa de pedir del promovente de la queja y por lo tanto no es incongruente.

El actor refiere en su demanda que la *Comisión Jurisdiccional* fue incongruente, ya que el medio de impugnación intrapartidario primigenio, estaba dirigido a una

⁹ Sirve de sustento, el criterio contenido en la jurisprudencia de la *Sala Superior* número **4/2000**, de rubro: **"AGRAVIOS, SU EXAMEN EN CONJUNTO O SEPARADO, NO CAUSA LESIÓN"**.

queja contra órgano y al momento de resolver dicha comisión estableció como problemática jurídica a dilucidar, si el ahora actor fungió como Secretario de Finanzas y Administración del *Comité Estatal* y como diputado federal al mismo tiempo, de ahí que considere que la sentencia es incongruente.

Contrario a lo que refiere el accionante, este Tribunal considera que no le asiste la razón por las consideraciones siguientes:

El artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que toda decisión de los órganos encargados de impartir justicia, debe ser pronta, completa e imparcial, en los términos que fijen las leyes. Estas exigencias suponen, entre otros requisitos, la congruencia de la resolución.

Así, el principio de congruencia de las sentencias consiste en que, al resolver una controversia, el órgano jurisdiccional lo haga atendiendo precisamente a lo planteado por las partes, sin omitir algo, ni añadir circunstancias no planteadas; además, la sentencia tampoco debe contener consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos o de los resolutivos entre sí.¹⁰

En relación con la congruencia de las sentencias, la *Sala Superior* ha considerado que se trata de un requisito, si bien de naturaleza legal, por regla, es siempre impuesto por la lógica, sustentada en el principio dispositivo del proceso, que obliga al órgano jurisdiccional a resolver de acuerdo con lo argumentado por las partes y probado en juicio, lo cual, le impide ocuparse de aspectos que no han sido planteados por las partes. En este orden de ideas, la sentencia o resolución, no debe contener, con relación a lo pedido por las partes: a) más de lo pedido; b) menos de lo pedido, y c) algo distinto a lo pedido.¹¹

Por tanto, para demostrar una violación al principio de congruencia, debe ponerse de manifiesto que: lo resuelto no coincide con lo planteado en la demanda o por alguna otra de las partes; que se introdujeron elementos ajenos a la litis planteada; o bien, la existencia de contradicción entre lo considerado y lo resuelto.

¹⁰ Lo anterior de conformidad con la jurisprudencia de la *Sala Superior* número **28/2009**, de rubro: **CONGRUENCIA EXTERNA E INTERNA. SE DEBE CUMPLIR EN TODA SENTENCIA**

¹¹ Criterio contenido en el expediente SUP-JDC-1149/2017.

Ahora, con la finalidad de evidenciar **lo infundado del agravio**, es necesario establecer, en primer término, cuál fue la pretensión de Daniel Alejandro Mares Sánchez al promover la demanda primigenia y en qué circunstancias fácticas y jurídicas fundó aquélla, para posteriormente contrastarlo con lo resuelto por la autoridad jurisdiccional responsable.

En el caso, Daniel Alejandro Mares Sánchez, en calidad de militante del *PRD*, presentó su demanda, por una parte, en contra del *Comité Estatal* por la omisión de dicho órgano de convocar al consejo estatal para nombrar un nuevo titular apto de la Secretaría de Finanzas y Administración del partido; y por otra, en contra de **Arturo Bravo Guadarrama**, quien se desempeña en dicho cargo partidista, pero al mismo tiempo ejerce un cargo de elección popular, lo que en su concepto actualiza una vulneración a lo establecido en sus Estatutos, tal y como se muestra a continuación:

1-000013
000122

cargo de elección popular o en mandos superiores de la administración pública salvo que soliciten la licencia respectiva.

Artículo 112. Los funcionarios públicos no podrán ser representantes electorales del Partido.

En una parte del artículo 193 del Estatuto del PRD relativo a las Secretarías de Finanzas cita:

ARTÍCULO 193 DEL ESTATUTO DEL PRDEn periodo de elecciones constitucionales, las Secretarías de Finanzas de los Comités Ejecutivos de todos los ámbitos deberán rendir los informes de precampaña dentro de los diez días posteriores a la conclusión de la misma, y de campaña por periodos de treinta días contados a partir del inicio de la misma.

En ambos casos, los informes se presentarán dentro de los tres días siguientes a la conclusión de cada periodo.

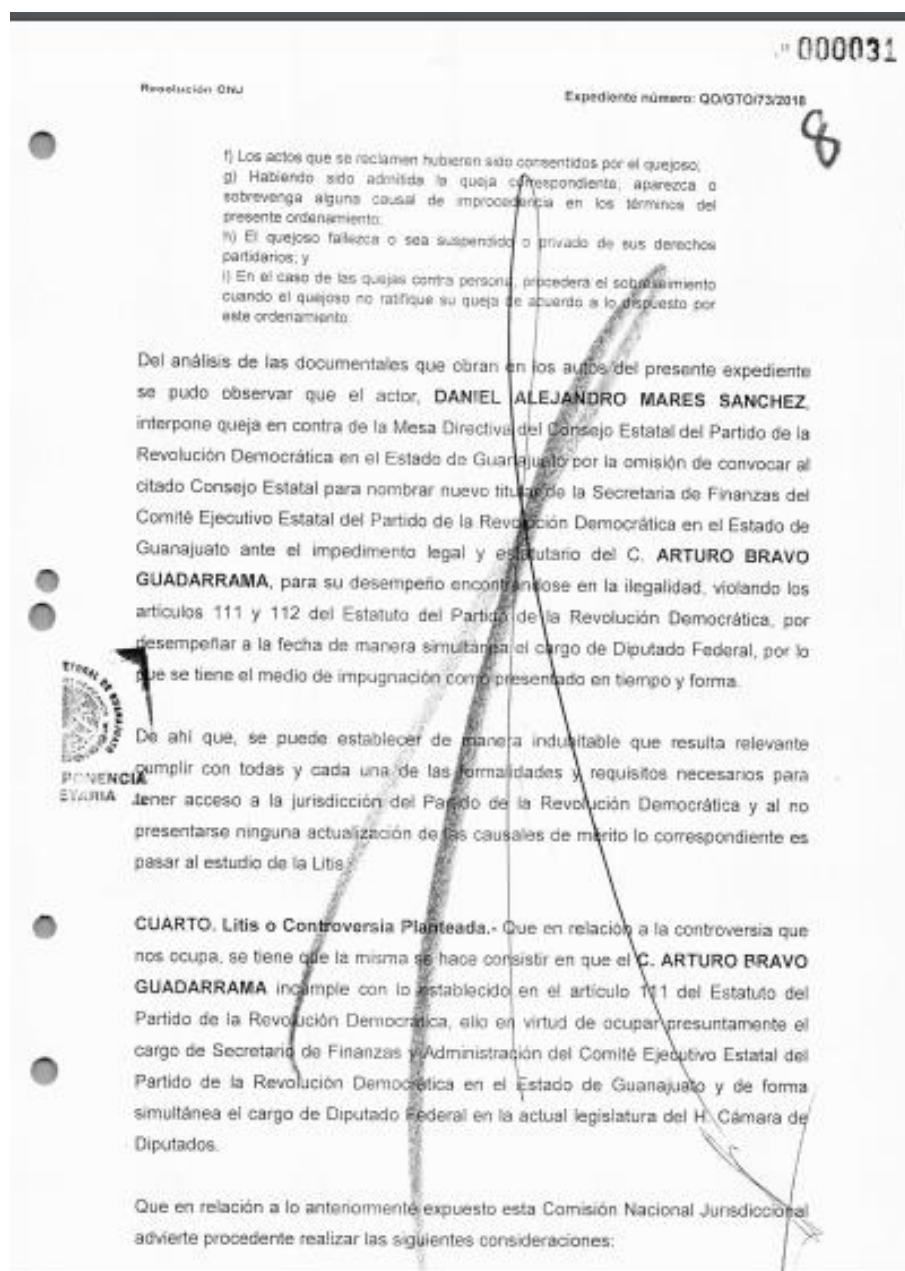
Los informes antes mencionados serán presentados a las autoridades electorales a las cuales por ley se encuentren obligadas, al Comité Ejecutivo Nacional, al Consejo respectivo y a la Comisión de Auditoría del ámbito que corresponda.

NOS AGRAVIA.- Del IX Consejo Estatal del PRD en Guanajuato, a través de su mesa directiva, la omisión de convocar al Consejo Estatal para TRATAR EL TEMA en punto específico del orden del día para el efecto de en su caso darle tramite al artículo 113 del Estatuto del PRD, y de nombrar TITULAR APTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DEL PRD EN GUANAJUATO, ante el impedimento legal y Estatutario que tiene ARTURO BRAVO GUADARRAMA, para su desempeño encontrándose en la ilegalidad. Violando los artículos 111 y 112 del Estatuto del PRD.

TAMBIÉN ME AGRAVIA.- DE ARTURO BRAVO GUADARRAMA, QUIEN SE VENIA DESEMPEÑANDO COMO SECRETARIO DE FINANZAS DEL COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL DEL PRD, EN EL ESTADO DE GUANAJUATO. EL ILEGAL DESEMPEÑO Toda vez que viola los dispositivos 111 y 112 del Estatuto del PRD. AL ESTAR DESEMPEÑANDO AL MISMO TIEMPO EL CARGO DE DIPUTADO FEDERAL EN LA ACTUAL LEGISLATURA.

VII.- EN SU CASO, EL NOMBRE Y DOMICILIO DEL TERCERO INTERESADO: Benito
Protesta de Decir verdad no existe.

Por su parte la *Comisión Jurisdiccional*, estableció en la resolución impugnada, en lo que al presente análisis interesa, lo siguiente:



Documentales que obran en copias certificadas dentro del expediente **QO/GTO/73/2018**, expedidas por Francisco Ramírez Díaz, en carácter de Secretario de la *Comisión Jurisdiccional*, mismas que en términos de los artículos 412 y 415 de la *Ley electoral local* merecen valor probatorio pleno, dado que su autenticidad y contenido no fue controvertido por las partes, ni se encuentra en contradicción con algún otro medio de prueba.

En este sentido, contrario a lo que refiere el accionante, la *Comisión Jurisdiccional* no modificó la causa de pedir del actor, pues si bien parte de los agravios se dirigieron en contra de la omisión del *Comité Estatal* de convocar al

Consejo Estatal para nombrar un nuevo titular apto de la Secretaría de Finanzas y Administración del partido, lo cierto es que Daniel Alejandro Mares Sánchez también expresó agravios en contra del ahora actor, al estimar que éste vulnera los estatutos de su partido al ejercer al mismo tiempo ejerce un cargo partidista y otro de elección popular.

Por lo tanto, resulta congruente que la responsable analizara si existía o no una actualización del supuesto establecido en el artículo 111 de los Estatutos del *PRD*; es decir, si en el caso concreto Arturo Bravo Guadarrama, se encontraba desempeñando o no de manera simultánea el cargo de Secretario de Finanzas y Administración del *Comité Estatal*, así como el cargo de diputado federal en la LXIII Legislatura, tal y como lo realizó en la resolución impugnada.

En ese sentido, la resolución atendió precisamente a lo planteado por las partes, sin añadir circunstancias no planteadas, ni contener consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos.

3.4. La resolución dictada por la *Comisión Jurisdiccional* no ordenó destituir a Arturo Bravo Guadarrama para el cargo de Secretario de Finanzas y Administración del *Comité Estatal*.

Carece de razón el inconforme al pretender que se revoque la resolución emitida en el expediente **QO/GTO/73/2018**, al considerar que dicha resolución ordenó su destitución como Secretario de Finanzas y Administración del *Comité Estatal*.

Lo anterior, porque el actor parte de la premisa errónea de que en la sentencia impugnada se ordenó su destitución; sin embargo, de las constancias que obran en autos, se advierte que la *Comisión Jurisdiccional* al momento de resolver no estableció en ningún apartado como consecuencia la destitución de Arturo Bravo Guadarrama como Secretario de Finanzas y Administración del *Comité Estatal*.

En efecto, si bien la resolución impugnada estableció que se había acreditado que Arturo Bravo Guadarrama, estaba ejerciendo de manera simultánea el cargo de Secretario de Finanzas y Administración del *Comité Estatal*, y el cargo de diputado federal de la LXIII Legislatura, lo cierto es que también estimó que dicho ejercicio simultáneo atendió a la licencia solicitada por parte del diputado

propietario de la fórmula en la que el actor fue electo como suplente, por lo que no existía una actitud dolosa, ni con la intención de vulnerar el artículo 111 de los Estatutos del *PRD*, por parte de Arturo Bravo Guadarrama.¹²

Por tal motivo, consideró que resultaría jurídicamente incorrecto que dicha comisión resolviera en el sentido de remover a Arturo Bravo Guadarrama de su cargo como Secretario de Finanzas y Administración del *Comité Estatal*, así como que ordenara al *Comité Estatal* para que en uso de sus atribuciones nombrara un sustituto.¹³

Así, a efecto de no vulnerar los derechos políticos del ahora actor y minimizar los efectos negativos al interior del *PRD*, la *Comisión Jurisdiccional* ordenó a Arturo Bravo Guadarrama que en el plazo de diez días hábiles, manifestara cuál de los dos cargos deseaba continuar ejerciendo, pero sin establecer como consecuencia que en el caso de no optar por alguno, se le tendría por destituido del cargo partidista, de ahí que no le asista la razón al promovente al manifestar que la resolución combatida ordenó su destitución como Secretario de Finanzas y Administración del *Comité Estatal*.

3.5. La *Comisión Jurisdiccional* no estaba obligada a ordenar el inicio del procedimiento de destitución del actor, por lo que no se vulneró su garantía de audiencia.

Finalmente, el actor señala que le causa agravio que la *Comisión Jurisdiccional* al estimar fundada la queja contra órgano, en lugar de proceder a su destitución, debía ordenar a los integrantes de la Mesa Directiva del Consejo Estatal del *PRD* en Guanajuato, iniciar el procedimiento previsto en los artículos 26, incisos c) y d), 27 al 31, 35, 51 y 59 del Reglamento de los Consejos del *PRD*, para la remoción o destitución de su cargo y que al no hacerlo se vulneró su garantía de audiencia y defensa, para manifestar las razones por las cuales no debía prosperar su destitución.

No le asiste la razón al actor, pues parte de la premisa incorrecta de que la resolución impugnada ordenaba su destitución, lo cual como ya se estableció

¹² Ver párrafo tercero de la página 33 de la resolución intrapartidista, consultable a foja 56 de autos.

¹³ Ver párrafo quinto de la página 33 y párrafo primero de la página 34 de la resolución intrapartidista, consultables a fojas 56 y 57 del expediente.

en el apartado previo no aconteció, pues la Comisión Jurisdiccional consideró suficiente con requerir al accionante para que renunciara voluntariamente a alguno de los cargos que venía ejerciendo de manera simultánea, los cuales eran incompatibles, sin establecer una consecuencia para el caso en que decidiera no optar por alguno de ellos.

En tal sentido, al no estar obligada la responsable a ordenar el inicio de dicho procedimiento, ni haber decretado la destitución del actor, este Tribunal considera que no se vulneró su garantía de audiencia, pues se insiste, la responsable decidió darle la oportunidad de elegir cuál de los dos cargos deseaba desempeñar, al considerar que su actitud no había sido dolosa, ni con la intención de vulnerar los estatutos de su partido, de ahí que su agravio se estime **infundado**.

Por todo lo anterior, al ser desvirtuados los argumentos hechos valer por la parte actora, lo procedente es confirmar la resolución impugnada.

4. RESOLUTIVO.

ÚNICO.- Se confirma la resolución **QO/GTO/73/2018**, emitida por la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática, el diecisiete de abril del año dos mil dieciocho, por las razones expresadas en el presente fallo.

Notifíquese de manera **personal** a la parte **actora** Arturo Bravo Guadarrama, así como al **tercer interesado** Daniel Alejandro Mares Sánchez, en sus respectivos domicilios procesales que obran en autos; mediante **oficio** a la Comisión Nacional Jurisdiccional del Partido de la Revolución Democrática, por conducto de su Presidente, a través de servicio postal especializado en su domicilio ubicado en la Ciudad de México; y finalmente, por los **estrados** de este Tribunal a cualquier persona que pudiera tener un interés legítimo que hacer valer, anexando en todos los casos, copia certificada de la presente resolución.

Publíquese la presente determinación en la página electrónica www.teegto.org.mx, en términos de lo que establece el artículo 109 del Reglamento Interior del Tribunal y **comuníquese al tercero interesado a la dirección de correo electrónico señalada para tal efecto**.

Así lo resolvió el Pleno del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato, por unanimidad de votos de quienes lo integran, Magistrados Electorales **Héctor René García Ruiz**, **Gerardo Rafael Arzola Silva** y Magistrada Electoral **María Dolores López Loza**, quienes firman conjuntamente, siendo Magistrada Instructora y Ponente la última nombrada, quienes actúan en forma legal ante el Secretario General, Alejandro Javier Martínez Mejía.- Doy Fe.

Héctor René García Ruiz
Magistrado Presidente

Gerardo Rafael Arzola Silva
Magistrado Electoral

María Dolores López Loza
Magistrada Electoral

Alejandro Javier Martínez Mejía
Secretario General